

ECONOMÍA Y TRABAJO



Un avión de Air Europa, estacionado en el aeropuerto de Palma en noviembre. / LITERES (EFE)

Air Europa solicita al Gobierno 400 millones para evitar la quiebra

La SEPI deberá decidir si inyecta el dinero público con la mirada puesta en Iberia

RAMÓN MUÑOZ, Madrid
Air Europa ha pedido 400 millones de euros al fondo público de rescate de empresas estratégicas para salvarse de la quiebra ante el impacto de la pandemia y la falta de recupe-

ración de la demanda aérea por las cuarentenas decretadas por varios países, según informaron fuentes de la Administración. La propuesta ya está siendo analizada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

(SEPI) que debe justificar que las ayudas con dinero público se emplean exclusivamente para asegurar que la aerolínea siga operativa y no para abaratar su compra, pactada hace diez meses con Iberia.

La aerolínea del grupo Globalia ha pedido acogerse al fondo dotado con 10.000 millones creado por el Gobierno para ayudar a las empresas que considere estratégicas y cuya viabilidad se vea en peligro por la crisis desatada por el coronavirus.

Air Europa solicita el rescate al mismo tiempo que está pendiente su compra por IAG, el holding hispanobritánico al que pertenece Iberia, que fue acordada en noviembre pasado por 1.000 millones. El estallido de la pandemia hizo que se paralizase la operación y que IAG pidiera renegociar sus términos a la baja.

Como avisan diferentes expertos, la inyección de fondos públicos debe garantizar, independientemente de la fórmula que se elija (ayuda directa, préstamos participativos o entrada en el capital), que no se convierta en un mero saneamiento con el dinero del contribuyente para que Iberia ejecute la compra de Air Europa a un precio menor, cuyo importe además iría a parar a unos inversores privados como la familia Hidalgo.

Compañías como Ryanair ya han advertido de que denunciarán esas ayudas públicas a la aerolínea de Globalia ante las autoridades de competencia de la Unión Europea y, si es necesario, ante los tribunales. Al tratarse de un importe superior a 250 millones, la partida debe ser notificada a la Comisión Europea.

Tanto el Ministerio de Transportes, con el que se ha negociado el rescate, como la empresa declinaron ayer hacer ningún tipo de comentario.

La petición es la segunda que realiza una gran empresa con cargo al fondo de rescate tras la que formuló Duro Felguera, que el 28 de agosto solicitó una inyección de 100 millones. La fórmula empleada por la firma de ingeniería es una ampliación de capital por 30 millones y la concesión de un préstamo participativo por otros 70 millones. Debi-

do a la capitalización de la compañía asturiana, el Estado tendría una participación significativa de más del 40%.

En el caso de Air Europa, el motivo que aduce para su rescate por el Estado es la acuciante falta de fondos tras el parón provocado por el confinamiento y la fallida recuperación del tráfico aéreo desde que se levantó el estado de alarma en junio, ante la imposición de restricciones y cuarentenas de numerosos países a los pasajeros por viajar a España.

IAG pide 2.750 millones a sus accionistas y releva a Walsh

La noticia de la petición de rescate de Air Europa se produce un día antes de que se celebre la junta de accionistas de IAG, el grupo en el que está integrada Iberia, que debe aprobar una ampliación de capital de 2.750 millones de euros para hacer frente a la falta de liquidez, tras perder más de 3.800 millones en el primer semestre.

Confía en que esta inyección de fondos resulte suficiente para capear la crisis y no tenga que solicitar ningún rescate. Su mayor accionista, Qatar Airways, que controla

el 25,1% del capital, se ha comprometido a apoyar la ampliación.

La junta de accionistas, que se celebrará en Madrid de forma telemática, deberá avalar también en una votación consultiva que el irlandés Willy Walsh, que dará el relevo al español Luis Gallego como consejero delegado tras 15 años al frente del grupo, cobre el bonus de más de 880.000 libras (casi un millón de euros) correspondiente a 2019, que ha desatado cierta polémica según la prensa británica.

De esta forma, solo en el primer semestre, Air Europa arrastraría unas pérdidas de 450 millones, aunque la firma aún no ha hecho oficiales estos resultados. La aerolínea ya solicitó a mediados de mayo un préstamo de 140 millones de un sindicato de bancos, avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero se ha demostrado claramente insuficiente.

Con apenas un 35% de su flota en el aire y la mayoría de sus plantillas en un ERTE, a la compañía de Globalia le ha perjudicado especialmente el bloqueo de varios países latinoamericanos, sus mercados más rentables. Ha tenido que cancelar todas las salidas previstas para septiembre desde y hacia Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú. Por el momento, mantiene el resto de vuelos de largo radio a Guayaquil, Miami, Nueva York, Quito, San Pedro Sula, Santo Domingo y São Paulo que reincorporó a su programación, pero la ocupación es baja.

España no es el único país que sale al rescate de una de sus aerolíneas. El Gobierno alemán ha aprobado ayudas por 9.000 millones para Lufthansa; Air France-KLM ha recibido 10.000 millones de los Estados franceses y holandeses; Alitalia va a volver a ser renacionalizada con un coste de al menos 3.000 millones y la portuguesa TAP recibirá una inyección pública de 1.200 millones.

La brecha salarial en la Administración va en aumento

GORKA R. PÉREZ, Madrid

Las diferencias salariales entre los empleados de la Administración General del Estado (AGE) no solo no se han reducido durante los algo más de dos años de mandato socialista en el Gobierno, sino que en algunos casos incluso se han agravado. UGT publicó ayer su *Mapa de la desigualdad salarial en la AGE*, un estudio que constata diferencias de hasta 7.000 euros de media al año en las retribuciones mínimas del personal funcionario y laboral, realizando la comparativa entre categorías profesionales equivalentes.

"Se trata de una injusticia insoportable", aseguró ayer Carlos Álvarez, secretario federal de la Administración General de la Federación de Servicios Públicos de UGT. "En estos dos últimos años se han mantenido las desigualdades que siempre han existido en la Administración, a pesar de haber llegado a acuerdos para abordarlas. Unos acuerdos que se alcanzaron en la época previa a la crisis del coronavirus, algo que quizás está sirviendo de excusa para que no se apliquen", añadió Álvarez, rememorando los pactos alcanzados entre 2018 y 2019 con Meritxell Batet, entonces ministra de Política Territorial y Función Pública. "En este momento nuestra confianza con el Gobierno está rota", lamentó el dirigente ugetista.

Distintos complementos

El informe de UGT aborda en especial la brecha existente en las retribuciones mínimas de la plantilla de Instituciones Penitenciarias, con diferencias salariales notables en función del tipo de prisión en que se trabaje y de su ubicación, algo que "genera unas diferencias tremendas entre trabajadores que hacen prácticamente las mismas funciones", detalló Álvarez. Los trabajadores de los centros penitenciarios reciben complementos específicos de distinta cuantía en función de la comunidad autónoma en la que se encuentra cada prisión, que pueden suponer hasta 600 euros anuales de diferencia.

Otra de las decisiones del Gobierno que mayor malestar ha generado en los sindicatos es la de mantener al margen de la negociación para la regulación de la futura ley del teletrabajo a los empleados de la Administración General. "A fecha de hoy no tenemos ninguna notificación ni ninguna convocatoria para abordar esta situación, y podría decirse que la negociación colectiva en este sentido es inexistente", enfatizó Álvarez.